mo eclesiasticistas. Me parece claro que González Sánchez encaja en el primer sector, no sólo por sus pronunciamientos respecto al objeto del Derecho Eclesiástico, sino porque en ninguna de sus publicaciones se encuentran disquisiciones ideológicas, ni su producción científica recoge muestra alguna de huída de los temas propios de esta especialidad jurídica.

Este trabajo destaca, ante todo, por su honradez. El autor se propone analizar un tema muy concreto y lo hace con solvencia y rigor, dando muestras de madurez. En este sentido, suscribo plenamente las palabras con las que Isidoro Martín Sánchez cierra el prólogo: «nos encontramos ante un trabajo de obligada referencia para cuantos estén interesados por este tema y que constituye una palmaria muestra de la madurez de su autor así como de la actual pujanza de la doctrina eclesiasticista española».

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO

González-Varas Ibáñez, Alejandro, *Consejo y consentimiento en los órganos colegiados canónicos. Su incidencia en el derecho público secular medieval*, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, 462 pp.

Tanto el CIC de 1917 como el de 1983 contienen determinaciones sobre la exigencia de consultar o incluso de obtener el consentimiento de los colegios de la organización eclesiástica, como condición de validez de ciertos actos de la autoridad (cfr. cc. 105 del CIC de 1917 y 127 § 1 del CIC de 1983). Son requisitos que afectan sobre todo al ejercicio de la potestad de los obispos diocesanos y de los superiores de institutos de vida consagrada, pero constituyen asimismo criterios de prudencia y buen go-

bierno aplicables con carácter general. Estas exigencias son profundamente tradicionales, pues el derecho canónico ha buscado maneras de compensar la inevitable amplitud de ejercicio de la potestad de los pastores con el necesario ajuste a la norma jurídica y moral. A falta de una concreción de las reglas de procedimiento para la formación y expresión de los actos administrativos que pudiera resultar excesiva en la Iglesia, lo que pide al menos la prudencia del gobernante es la necesaria consulta e incluso la preceptiva autorización para realizar algunos actos de especial trascendencia para los individuos o toda la comunidad.

Alejandro González-Varas es profesor de derecho eclesiástico en la Universidad de Zaragoza y es conocido por otros libros de derecho canónico y eclesiástico. Esta vez ha publicado una monografía canónica de carácter estrictamente histórico, hasta el punto de que no existe ninguna referencia a la codificación canónica del siglo XX. En efecto, el autor nos ofrece en este libro un estudio de los criterios del derecho canónico medieval sobre la petición de consejo en el gobierno, las deliberaciones y la toma de decisiones de los órganos colegiados. Más concretamente, el marco del estudio comprende los textos y comentarios doctrinales de los siglos XII a XIV, época verdaderamente decisiva para la fundación y desarrollo de la ciencia del derecho canónico y su relación con el derecho secular.

Además de extensas introducción y conclusiones, el libro consta de diez capítulos, distribuidos en tres partes. La primera se pregunta por los orígenes y los instrumentos de manifestación de la voluntad de las llamadas *universitates*, que con terminología moderna podríamos identificar con las personas jurídi-

cas colegiales (sólo en parte), con los órganos colegiados o más sencillamente con los colegios del derecho canónico. Es lógico que éste sea el punto de partida, pues como presupuesto de la función consultiva colegial, que es el tema del libro, es necesario preguntarse por los presupuestos de la colegialidad jurídica. Esta primera parte comprende dos capítulos sobre la conceptualización de la *universitas* en la edad media (a partir del derecho romano, del germánico y de la Iglesia primitiva) y la construcción de la doctrina de la *persona ficta* en el derecho canónico. Se trata de una materia muy estudiada por los canonistas, en la que el autor se desenvuelve con competencia.

La segunda parte es la más extensa y se titula de la misma manera que la monografía: consejo y consentimiento en los órganos colegiados canónicos. A lo largo de siete capítulos el autor escribe sobre la fundamentación de la función consultiva colegial en el derecho canónico y de los ámbitos en los que se aplica especialmente: negocios patrimoniales, y especialmente las enajenaciones de bienes eclesiásticos, convocatoria de concilios, nombramientos y remociones, condenas de herejías y otros casos. Un protagonismo muy especial lo ocupan en esta segunda parte tres amplios capítulos dedicados a la aplicación del principio jurídico «lo que afecta a todos por todos debe ser aprobado» (*quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*): su evolución desde el derecho romano hasta el derecho canónico clásico, su contenido, sus aplicaciones a los casos de convocatoria de concilios, participación en los colegios, elecciones canónicas.

En la tercera parte de la obra el autor sigue con el análisis del citado prin-

cipio, ahora ya en el marco del derecho secular, como anuncia el subtítulo del libro. Esta última parte consta de tres capítulos que estudian el principio consultivo a través de los tratados de educación de los príncipes medievales (los llamados «espejos de príncipes»), ya que éste fue un cauce de difusión de los principios canónicos de buen gobierno a través de la tarea educadora frecuentemente encomendada a clérigos; en segundo lugar, el amplio tema de la vigencia de los principios del consejo, consentimiento y *quod omnes tangit* en el derecho parlamentario bajomedieval, concretamente en el marco de las cortes aragonesas y castellanas, con algunas referencias también a los orígenes del parlamentarismo inglés y francés. El tema es de especial interés para el objeto de la monografía, porque son ya tradicionales algunas opiniones afirmativas de la influencia del derecho canónico colegial en los orígenes del parlamentarismo europeo. Por fin, el último capítulo de esta tercera parte y décimo de la obra se ocupa de las opiniones de los canonistas medievales sobre el consentimiento de los afectados, especialmente en las materias de recaudación y devaluación de la moneda.

Como puede intuirse ya por este breve resumen del contenido de la obra, son bastante variadas las materias de las que se ocupa el autor. Algunas son de técnica administrativa, otras de dogmática jurídica y finalmente no faltan las que pertenecen a la filosofía política y a la historia de las ideas, como por ejemplo la gran cuestión histórica del conciliarismo o el problema de los límites del poder de gobierno. Pienso de todas formas que hay dos cuestiones que tienen especial interés. La primera es el tratamiento del principio *quod omnes tangit*, que en realidad no se limita a un capítulo concreto sino

que se desarrolla a lo largo de todo el libro. La segunda es el acercamiento del autor a las relaciones medievales entre derecho canónico y derecho secular.

El principio *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* está recogido hoy en el c. 119. 3º del CIC de 1983, dedicado a los actos colegiales, que añade el matiz «*uti singulos*»: *quod omnes uti singulos tangit ab omnibus approbari debet*. (Este criterio tiene dentro del CIC algunas aplicaciones, como por ejemplo el c. 455 § 4 referido a las condiciones de legitimidad de los decretos generales de las conferencias episcopales). En efecto, como se comprueba en el libro de González-Varas, el contexto del principio romano-canónico señalado es el de la formación de la voluntad de las *universitates*. El consejo o el consentimiento se piden al colegio como tal, y para llegar a formar el acto que exprese cuál ha de ser la voluntad del colegio la historia del derecho canónico ha admitido diversas posibilidades. Una primera fase sería la de la unanimidad de los miembros del colegio para adoptar cualquier decisión. Este expediente de la unanimidad es comprensible en una etapa en la que todavía no se había consolidado la consideración de la *universitas* como una entidad con voluntad propia, al estilo de lo que hoy entendemos como persona jurídica. Y además se entiende que la unanimidad sea la opción que mejor represente en la Iglesia la comunión y el entendimiento entre los miembros del colegio. Por eso, aunque pronto se vieron las dificultades prácticas de exigir siempre y de lograr la unanimidad, la Iglesia no admitió de una vez la sustitución de la unanimidad por la votación mayoritaria, sino que conservó durante mucho tiempo el principio de la *sanior pars*, la parte más sana o más prudente. En este sentido, no era suficiente

que la mayoría del colegio diera su consentimiento, sino que además debían formar parte de la mayoría los mejores colegas, es decir, los más prudentes, los mejor preparados, los más expertos, reconocidos como tales por los demás. Sólo en la última fase de la evolución el derecho canónico admitió definitivamente el sistema mayoritario, sin renunciar con todo a la exigencia de mayorías reforzadas para actos de singular importancia, como ocurre hoy con la elección del papa o con la aprobación de los decretos generales de las conferencias episcopales.

Pues bien, el principio *quod omnes tangit* venía a expresar no solamente la necesidad de la convocatoria de los miembros del colegio sino también una distinción entre los derechos individuales de los miembros y las competencias corporativas. Si el *voluntum* o consentimiento que se pide al colegio afecta a los miembros del colegio considerados individualmente, *uti singuli*, entonces la aprobación debe ser unánime; si, en cambio, se refiere a los miembros colegialmente considerados —*uti universi*, es decir, al colegio como tal—, bastará la aprobación mayoritaria. Un ejemplo característico de esta distinción es la deliberación colegial que pueda afectar al ejercicio del voto, como derecho inalienable de los miembros del colegio: así, cuando un colegio electoral toma la decisión de transmitir el ejercicio de la elección a una asamblea de compromisarios, esa decisión no puede ser simplemente mayoritaria sino que los compromisarios deben ser habilitados por acuerdo unánime de los miembros del colegio, ya que nadie puede decidir por ellos sobre el ejercicio personalísimo del voto.

De esta manera el principio *quod omnes tangit* era un instrumento protec-

tor de los propios miembros del colegio frente a posibles excesos de la mayoría. Un criterio que se desarrolla en el derecho canónico al abrigo de la consolidación del sistema mayoritario y de la doctrina sobre el *consilium* y el *consensus*. Todo ello formará parte históricamente de la profunda ciencia canónica sobre las personas jurídicas colegiales y el derecho electoral, como se puede comprobar a través de la lectura de este libro.

Respecto a la segunda cuestión señalada, es decir la incidencia del derecho colegial canónico en el derecho secular, es muy estimable la prudencia con la que el autor opina sobre esta cuestión desde la sólida base de su amplio estudio. De entrada, él recuerda que el ambiente jurídico medieval no era el de una separación completa entre el ordenamiento canónico y el derecho de los reinos y ciudades. Más bien podía hablarse de una interacción. Pese a lo que se ha afirmado por algunos autores, no resulta clara la influencia del principio *quod omnes tangit* en el derecho público secular; esa influencia consistió más bien en un clima político que favoreció la consulta a determinadas personas y el necesario consentimiento de algunas asambleas. Aquí nos presenta el autor un interesante panorama del ejercicio del poder a través de las cortes y pre-parlamentos medievales. Dentro de este ambiente, «el derecho canónico, por su mayor desarrollo y elaboración» se adelantó «en la fijación de los criterios jurídicos que, en su interior, debían regir la función de consejo y de consentimiento, pero sin crear *ex nihilo* esta teoría» (p. 433); además, la labor de influencia educativa de los eclesiásticos sobre los reyes contribuyó también a formar esa conciencia de necesidad de consejo, que en último término habría de manifestarse en las Cor-

tes medievales. Concluyendo, la regla *quod omnes tangit* vino a aplicar un principio de la época referido a la participación y límites en las decisiones. «Las Cortes no es que se deban a la regla “*quod omnes tangit*” en cuanto tal, de modo que si no se hubiera formulado no hubieran aparecido esas asambleas, sino que el derecho canónico se dio cuenta de que la política del momento giraba en torno a esa idea, y con su transformación en un principio jurídico contribuyó a que esa mentalidad calara antes, o más profundamente, en el gobierno de los reyes» (pp. 435 y 436).

Me he referido con más detalle a un par de cuestiones centrales que aparecen tratadas en la monografía de González-Varas, pero el amplio texto da mucho más. El autor ha estudiado detenidamente muchos textos y comentarios de los maestros medievales, profusamente citados en el libro. Con el mérito añadido de que son textos, como sabemos, cuyo sentido no siempre resulta fácil de precisar. Es muy de agradecer que dispongamos ahora de este estupendo trabajo que se une a la bibliografía internacional ya disponible sobre estas cuestiones centrales del ordenamiento jurídico de la Iglesia.

ANTONIO VIANA

Il Cardinale Aurelio Sabattani (1912-2003), *Omilie, discorsi, e testimonianze*, a cura di Vicente Cárcel Ortí, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, 388 pp.

Esta publicación se ha hecho por sus más íntimos colaboradores con el objeto de guardar viva la memoria del cardenal Aurelio Sabattani, que nació en la parroquia de San Andrés de Pieve, en el